



COMITÉ DE TRANSPARENCIA¹

CUARTA SESION
ORDINARIA 2019
24 DE ENERO DE 2019

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional; así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



CONSIDERACIONES

Con motivo de las publicaciones de fecha 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República; se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa tesitura, en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe tomar en consideración lo previsto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto aludido, que citan:

Sexto. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, **se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.** Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos de esta Ley.

Noveno. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, **así como la reestructura y definición de los órganos administrativos** y los sustantivos para la función fiscal.

...

III. Estrategia específica respecto al **personal en activo** y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el **diseño y activación de la nueva estructura organizativa**; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

...

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios **para el** seguimiento, colaboración y vigilancia;

...



Décimo Segundo. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

....
II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de elección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República **en términos de los principios establecidos en la presente Ley**. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

...

Lo anterior, en correlación con el artículo 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

...

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

...

Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador**.

La comunicación, actividades y flujo de información de **las unidades administrativas y órganos desconcentrados** a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

[illegible]

Página 3 de 185

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



Lcda. Adriana Fabiola Rodriguez León

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.

En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).



SEDE: Ciudad de México
Av. Insurgentes No. 20, Piso 8
Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.
Auditorio 22 de Octubre, Sección 1

PRESENTACIÓN

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

A las diecisiete horas con treinta y nueve minutos del martes veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el Auditorio 22 de octubre, sección 1 del inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes, número 20, Piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia verificó la asistencia de sus integrantes, encontrándose presentes la Presidenta del Comité de Transparencia; la representante del Área Coordinadora de Archivos y el representante del Órgano Interno de Control, por lo que de conformidad con el numeral Sexto y Séptimo del Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República, se da cuenta que hay quórum legal para sesionar.

Del mismo modo, se asienta que se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.**
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:**

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

- A.1. Folio 0001700316218 – RRA 0080/19
- A.2. Folio 0001700316318 – RRA 0079/19

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

- B.1. Folio 0001700335818
- B.2. Folio 0001700342018
- B.3. Folio 0001700342418
- B.4. Folio 0001700347418
- B.5. Folio 0001700347618
- B.6. Folio 0001700347518
- B.7. Folio 0001700348418
- B.8. Folio 0001700349318
- B.9. Folio 0001700349418
- B.10. Folio 0001700002019
- B.11. Folio 0001700002419
- B.12. Folio 0001700004119
- B.13. Folio 0001700004419
- B.14. Folio 0001700011019
- B.15. Folio 0001700011119
- B.16. Folio 0001700011219
- B.17. Folio 0001700011419
- B.18. Folio 0001700012019
- B.19. Folio 0001700012119
- B.20. Folio 0001700012219
- B.21. Folio 0001700012419
- B.22. Folio 0001700012519
- B.23. Folio 0001700013819
- B.24. Folio 0001700014919



C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la entrega o puesta a disposición de la versión pública de la documentación requerida:

C.1. Folio 0001700339218

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para proporcionar o pronunciarse por la información requerida;

D.1. Folio 1700200000519 – CECC

D.1. Folio 1700600007119 – OADEMASCMP

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

E.1. Folio 0001700335718

E.2. Folio 0001700338518

E.3. Folio 0001700340018

E.4. Folio 0001700340118

E.5. Folio 0001700341618

E.6. Folio 0001700341718

E.7. Folio 0001700347918

E.8. Folio 0001700348518

E.9. Folio 0001700349218

E.10. Folio 0001700349718

E.11. Folio 0001700349818

E.12. Folio 0001700349918

E.13. Folio 1700100063618 – AIC

E.14. Folio 1700100063918 – AIC

F. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada o inexistencia de la información requerida:

F.1. Folio 0001700329218

IV. Asuntos Generales.



ABREVIATURAS

FGR – Fiscalía General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.



ACUERDOS

I. Aprobación del orden del día.

Previa consulta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia a sus integrantes, los mismos por unanimidad aprueban el Orden del día para la actual sesión.

II. Aprobación del Acta de la Sesión Inmediata anterior.

Previa consulta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia a sus integrantes, los mismos por unanimidad aprueban el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019 que se registra en la ahora gestión de la Fiscalía General de la República, celebrada el 22 de enero de 2019.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:

En seguimiento al desahogo del orden del día la Secretaría Técnica de este Órgano Colegiado procede a dar lectura a los siguientes asuntos, para su posterior análisis y discusión por parte de los integrantes que componen el grupo de transparencia, máxima autoridad en el tema dentro de la Institución.

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio de la solicitud 0001700316218 – RRA 0080/19



Síntesis

Fosas localizadas en la Ciudad de México con cuerpos enterrados o semienterrados de manera ilegal.

Sentido de la resolución

Confirma

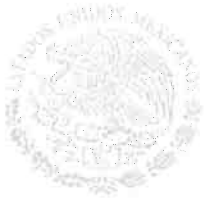
Rubro

Inexistencia de la información requerida

Contenido de la Solicitud:

"-Solicito datos de las siguientes fosas localizadas en la Ciudad de México con cuerpos enterrados o semienterrados de manera ilegal.

FOSA I: localizada en Diciembre-2008: solicito la fecha exacta, el sitio exacto del hallazgo con calle, numero, delagacion, coordenadas si las tienen; cuántas fosas en total, cuántos cuerpos encontrados o restos humanos (especificar si eran cuerpos o



restos y qué tipo de restos), si eran hombres o mujeres, si habia niños, si fueron identificados, si fueron entregados a sus familias, pruebas genéticas realizadas, si lleva el caso la PGR, numero de averiguacion previa y/o carpeta de investigacion." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CGSP, SCRPPA y SEIDO.**

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que la **CGSP** lleva un registro de las fosas localizadas en toda la República Mexicana, siempre y cuando exista intervención del personal de esta Coordinación, es decir, el registro que se tiene es solamente en cuanto a los cuerpos, cadáveres y/o restos óseos que ingresan al SEMEFO de la Coordinación.

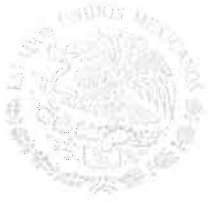
En ese orden de ideas, se proporcionó información estadística de fosas localizadas en la Ciudad de México, en el período comprendido del año 2008 al 2014, desglosada por fecha, estado, municipio/localidad, fosas, cuerpos y sexo, y atendiendo al antecedente de respuesta referido por el solicitante.

Por otra parte, la **SCRPPA** por conducto de la Delegación Estatal de la Ciudad de México, manifestó que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, localizó cero registros respecto al número de fosas localizadas en la Ciudad de México.

Ahora bien, la **SEIDO** manifestó que la información interés de la particular pudiera ser proporcionada por la **CGSP**, quien administra y opera un registro de perfiles genéticos que de forma general, permite confrontar los perfiles de las muestras biológicas tomadas a cuerpos y/o restos humanos no identificados, con posibles familiares de desaparecidos.

Por ende, al no contar con una base de datos tal y como la pide la recurrente, no puede determinar qué unidad administrativa, Subprocuraduría o Autoridad fue la que solicitó la intervención de la CGSP, por lo tanto se encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto de los registros localizados y entregados al solicitante, sobre el número de averiguación previa o carpeta de investigación o de algún otro dato sobre esos eventos.

Sin embargo, con motivo del recurso de revisión ingresado, la Unidad de Transparencia turnó nuevamente la solicitud a la áreas competentes; no obstante, las mismas fueron reiterativas en sus respuestas.



Determinación del Comité de Transparencia

Una vez expuestas las respuestas vertidas por las áreas, con el objeto de sobreseer el recurso de revisión en comento, este Órgano Colegiado determina lo siguiente:

ACUERDO

CT/ACDO/0053/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de inexistencia de una base de datos con el nivel de desglose requerido por el particular; es decir, que permita identificar y determinar específicamente, fecha exacta, calle, número, delegación, coordenadas, qué tipo de restos, niños, si fueron identificados, si fueron entregados a sus familias, pruebas genéticas realizadas, si lleva el caso la PGR u otra Institución incluso del fuero común, número de averiguación previa y/o carpeta de investigación y si fueron o no identificados los restos o cuerpos, la precisión de donde se encuentran actualmente esos cuerpos o restos, para el periodo aludido, o de si dichos datos pudieran obrar en un expediente de investigación a cargo de esta Fiscalía General; lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 141 de la Ley en la materia, en relación con el criterio 12/10, mismo que se transcribe a continuación:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(S) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.



A.2. Folio de la solicitud 0001700316318 – RRA 0079/19

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Cuerpos y/o restos humanos localizados en la Ciudad de México con cuerpos enterrados o semienterrados de manera ilegal.

Confirma

Inexistencia de la información requerida

Contenido de la Solicitud:

"-investigación

- Solicito estadística sobre la cantidad de cuerpos y/o restos humanos encontrados en la Ciudad de México enterrados o semienterrados desde el 1 de enero de 1998 al 15 de noviembre de 2018.

-Para cada uno de los casos señalar fecha exacta

-domicilio exacto (calle, número, delegación, incluir coordenadas si las tienen)

-cuantos cuerpos y/o restos encontraron

-el estado de los cuerpos o restos, especificar si eran cuerpos enteros o qué partes del cuerpo localizaron o si eran huesos y qué parte del cuerpo

-si eran hombres o mujeres

-si había niños

-si fueron identificados

-si hicieron pruebas de ADN

-Si el caso lo lleva la PGR

-si los restos fueron entregados a sus familias

-si no fueron identificados, decir donde están esos cuerpos o restos.

-Número de averiguación previa y/o carpeta de investigación.." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CGSP, SCRPPA y SEIDO.**

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que la **CGSP** lleva un registro de las fosas localizadas en toda la República Mexicana, siempre y cuando exista intervención del



personal de esta Coordinación, es decir, el registro que se tiene es solamente en cuanto a los cuerpos, cadáveres y/o restos óseos que ingresan al SEMEFO de la Coordinación.

En ese orden de ideas, se proporcionó información estadística de fosas localizadas en la Ciudad de México, en el periodo comprendido del año 2008 al 2014, desglosada por fecha, estado, municipio/localidad, fosas, cuerpos y sexo, y atendiendo al antecedente de respuesta referido por el solicitante.

Por otra parte, la **SCRPPA** por conducto de la Delegación Estatal de la Ciudad de México, manifestó que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, localizó cero registros respecto al número de fosas localizadas en la Ciudad de México.

Ahora bien, la **SEIDO** manifestó que la información de interés de la particular pudiera ser proporcionada por la **CGSP**, quien administra y opera un registro de perfiles genéticos que de forma general, permite confrontar los perfiles de las muestras biológicas tomadas a cuerpos y/o restos humanos no identificados, con posibles familiares de desaparecidos.

Por ende, al no contar con una base de datos tal y como la pide la recurrente, no puede determinar qué unidad administrativa, Subprocuraduría o Autoridad fue la que solicitó la intervención de la CGSP, por lo tanto se encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto de los registros localizados y entregados al solicitante, sobre el número de averiguación previa o carpeta de investigación o de algún otro dato sobre esos eventos.

Sin embargo, con motivo del recurso de revisión ingresado, la Unidad de Transparencia turnó nuevamente la solicitud a las áreas competentes; no obstante, las mismas fueron reiterativas en sus respuestas.

Determinación del Comité de Transparencia

Una vez expuestas las respuestas vertidas por las áreas, con el objeto de sobreseer el recurso de revisión en comento, este Órgano Colegiado determina lo siguiente:

ACUERDO

CT/ACDO/0053/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de inexistencia de una base de datos con el nivel de desglose requerido por el particular: es decir, que permita identificar y determinar específicamente, fecha exacta, calle, número, delegación, coordenadas, qué tipo de restos, niños, si fueron identificados, si fueron entregados a sus familias, pruebas genéticas realizadas, si lleva el caso la PGR u otra Institución incluso del fuero común, número de averiguación previa y/o carpeta de investigación y si fueron o no identificados los restos o cuerpos, la precisión de donde se encuentran actualmente esos cuerpos o restos, para el periodo aludido, o de si dichos datos pudieran obrar en un



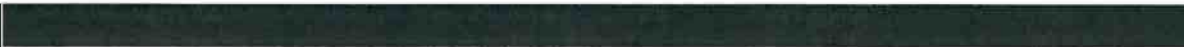
Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

[illegible]



B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

B.1. Folio de la solicitud 0001700335818



Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Lista del personal de base, titular de la plaza y suplentes de la PGR Delegación Yucatán,
Clasificación
Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Lista del personal de base, titular de la plaza y suplentes de la PGR delegación Yucatán, salarios que perciben, fecha en que empezaron con la titularidad de su base, tiempo de duración con la suplencia antes ser titulares de la plaza y respecto de los suplentes cuando vence su contrato, cuál es la duración de su contrato, fecha en que empezaron a cubrir la suplencia y su antigüedad en la institución. Lista de personal de confianza de PGR delegación Yucatán, salarios que perciben, duración de contrato, fecha de ingreso y su antigüedad en la institución." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

"Lista de personal de base titular Lista de personal de base suplentes Lista de personal de Confianza de Oficiales Ministeriales, Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados y de enlace" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0055/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM, respecto del personal sustantivo perteneciente a la Delegación Estatal Yucatán, de



conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo anterior, a fin de brindar una justificación de las causales de clasificación invocadas se rinden las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con el Estado de Fuerza de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Delegación Estatal Yucatan, causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de esta Institución encargada de la Seguridad Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de conocer información sobre el número de agentes, lo cual es propio de dar a conocer el Estado de Fuerza de la Policía Federal Ministerial.
- III. Principio de proporcionalidad: La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la capacidad de reacción, a través de la protección de la información relacionada con el Estado de Fuerza de la Policía Federal Ministerial, que se encarga de auxiliar al Ministerio

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Delegación Estatal Yucatan de esta Representación Social, como lo sería un listado con sus nombres, representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.



- II. Derivado de que las actuaciones de la Procuraduría tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de dicha Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.2. Folio de la solicitud 0001700342018

Síntesis

Investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"El pasado 12 de diciembre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció en sesión pública la resolución del recurso de revisión RRA 6994/18, en el que instruye a la PGR a revelar el nombre de los funcionarios públicos (o exfuncionarios) que han sido citados a declarar o que hayan sido notificados de que se encuentran bajo investigación en las carpetas de investigación abiertas por los presuntos sobornos o malos manejos que involucran a la contratista Odebrecht (Caso Odebrecht).

De esta forma el INAI modificó la respuesta que la PGR había proporcionado inicialmente negándose a proporcionar esta información.

Aquí algunos links donde puede consultarse el anuncio de dicha determinación:

https://twitter.com/bl_ibarra/status/1072945177600450560

<https://www.animalpolitico.com/2018/12/pgr-nombres-investigadas-odebrecht/>

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-ordena-pgr-dar-conocer-nombre-de-funcionarios-que-enfrentan-acusacion-penal-por-caso>

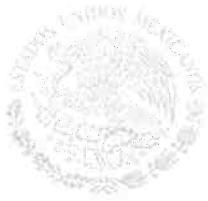
1) En ese contexto y en cumplimiento a lo ya resuelto por el INAI solicito se me proporcione la lista de personas que debe transparentarse, es decir, los nombres de los funcionarios públicos (o exfuncionarios) que han sido citados a declarar o que hayan sido notificados de que se encuentran bajo investigación en las carpetas de investigación abiertas por los presuntos sobornos o malos manejos que involucran a la contratista Odebrecht (Caso Odebrecht).

2) Y solicito que - independientemente de las identidades - se me proporcione el número total de personas que han sido citadas a declarar por el MPF y el número total de personas que se encuentran bajo investigación por este caso, identificando si se trata de funcionarios, exfuncionarios (y de que dependencias), o particulares.

Gracias" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF.**



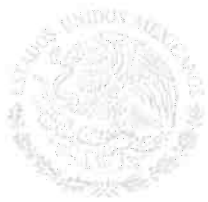
Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebrecht, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.



- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga **sentencia condenatoria irrevocable**, toda vez que se **afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre**, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.
- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su



Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población,** si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- ♦ Que **el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos,** prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, **el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite** por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que **atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.**

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas



relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal “por hechos de corrupción”, y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por “hechos de corrupción”, la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión pública de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que el Órgano Jurisdiccional hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano



Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción.**

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, **e impedir o evitar su uso, divulgación**, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización **indebidos**.
- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de



referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para perseguir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación, y con ello la afectación al debido proceso.
- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos



de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Además, de que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...



La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.



Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, **la honra, la moral, la estimación y la privacidad** de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309



DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales.



y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*



Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.3. Folio de la solicitud 0001700342418

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Investigación sobre el caso Odebrecht

Confianza

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el nombre de funcionarios y ex funcionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, así como el nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre este caso. Favor de detallar la fecha, lugar al que fue citado a declarar y nombre del ex funcionario o funcionario." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:



- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria;** es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución,** pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de



líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga sentencia condenatoria irrevocable, toda vez que se **afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre**, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población**, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada.



consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.

- ♦ Que **el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos**, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, **el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.**

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción** es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.



Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción**.

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e



información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados



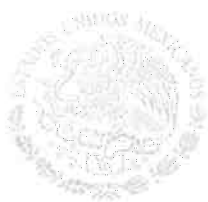
con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben



observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos



1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

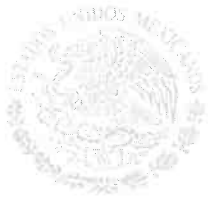
Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.



De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*



Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

l. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.4. Folio de la solicitud 0001700347418



Síntesis

Investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"El 17 de diciembre el pleno del INAI resolvió modificar una respuesta que la PGR proporcionó en una solicitud de información y le instruyó para que entregue versiones públicas de las declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de directivos de la empresa Odebrecht, todas ellas relacionadas con las investigaciones que tiene abiertas por el caso Odebrecht y la apertura de tres contratos de obra pública.

Aquí una referencia a dicha resolución:

<https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1565848&v=6&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1565848&v=6>

En ese contexto y en cumplimiento a lo anterior solicito dos cosas

1) Versión pública de las declaraciones de todos los servidores públicos, exservidores públicos y particulares que el Ministerio Público Federal haya recabado como parte de estas investigaciones.

2) Versión pública de la carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por este caso y que de acuerdo con resoluciones previas del INAI debe transparentarse por imperar el interés público general.

Gracias." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de



investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebrecht, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad **para** allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las**



investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga **sentencia condenatoria irrevocable**, toda vez que se **afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre**, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.
- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. *Reserva de los actos de investigación*

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.



Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- ♦ Que el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada



con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes



para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción.**

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años.**
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, **e impedir o evitar su uso, divulgación,** sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización **indebidos.**
- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.



Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de



enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:



TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:



Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.



Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral



públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

[illegible]

Página 55 de 185



B.5. Folio de la solicitud 0001700347618

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Registro de los bienes inmuebles asegurados
en la Ciudad de México

Confirma

Confidencialidad del pronunciamiento

Contenido de la Solicitud:

"1.-Me sea proporcionada una relación de bienes inmuebles asegurados en la Ciudad de México por la Procuraduría General de la República, en procedimientos, investigaciones, denuncias o carpetas de investigación penales locales o federales, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018. 2.- Me sea proporcionada una relación de bienes inmuebles asegurados en la Ciudad de México por la Procuraduría General de la República, en procedimientos, investigaciones, denuncias o carpetas de investigación penales locales o federales, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018, con dirección exacta y correcta. 3.-Me sea proporcionada una relación de bienes inmuebles asegurados por la Procuraduría General de la República, ubicados en la Ciudad de México derivados de procedimientos, investigaciones, denuncias o carpetas de investigación penales locales o federales, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018, y que fueron transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP, durante el periodo indicado previamente. 4.-Me sea proporcionada una relación con domicilio exacto y preciso de bienes inmuebles asegurados por la Procuraduría General de la República, ubicados en la Ciudad de México derivados de procedimientos, investigaciones, denuncias o carpetas de investigación penales locales o federales, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018, y que fueron transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP, durante el periodo indicado previamente." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM, SCRPPA, SDHPDSC, SEIDO, SEIDF, SJA, UFAF, FEPADE.**



**ACUERDO
CT/ACDO/0059/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto a las peticiones inherentes a “dirección exacta y correcta” y “domicilio exacto y preciso” de los bienes inmuebles que han sido asegurados por este Sujeto Obligado, de los cuales no se cuente con una sentencia condenatoria firme, toda vez que el dar a conocer dicho dato podría vincular a una persona identificada e identificable (propietaria del bien inmueble) a un procedimiento penal en su contra, ello conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria firme.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable (al proporcionar la información requerida) con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

**TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III**

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:



TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II

DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:



Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.



Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral.



públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".



De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----

Página 62 de 185



B.6. Folio de la solicitud 0001700347518

Síntesis

Investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Con base en mi derecho a la información, solicito la entrega de copia de las declaraciones ministeriales de funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que han hecho sobre el caso Odebrecht. Gracias." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios



criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o **identificable** que no tenga **sentencia condenatoria irrevocable**, toda vez que se **afectaría su**



intimidad, prestigio y buen nombre, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población,** si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.



- ♦ Que **el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos**, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, **el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.**

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción** es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados,



establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción**.

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga **bajo su**



responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento **alguno respecto a la información solicitada**, misma que se contiene en **investigaciones en trámite** limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los **delitos**, ya que **dar a conocer cualquier información**, puede poner en **riesgo las acciones** implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien **provocar** alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados



con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben



observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

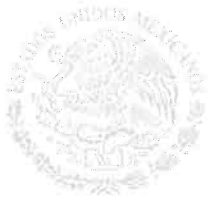
Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos



1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.



De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*



Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.7. Folio de la solicitud 0001700348418

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Contenido de la Solicitud:

"Solicito me sea entregado y desglosado en estadística y números por subprocuradurías y áreas: cantidad de servidores públicos que laboran para la Procuraduría General de la República hasta el momento de la entrega de la información." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM, COPLADII y UTAG.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0061/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción I:



- I. Que el divulgar información correspondiente a la estructura orgánica de la SEIDO, en específico, individualizar al número de servidores públicos que componen a cada una las unidades administrativas adscritas a dicha Subprocuraduría, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que atentaría el compromiso en materia de seguridad pública a cargo de la citada Subprocuraduría, vulnerando así el estado de fuerza y causando un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, máxime que dicha información se traduce en la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la delincuencia organizada, propiciando que miembros de la delincuencia conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.

Robustece lo anterior, toda vez que la clasificación de estricta reserva de la información solicitada no obedece a un criterio arbitrario, sino que opera la reserva de la información por Ministerio de Ley, en razón que existen disposiciones legales tanto generales como específicas, que expresamente mandatan su reserva.

Lo anterior, máxime que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, se establece que a dicha Representación Social le corresponde contribuir a garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la citada carta magna, mediante una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a las reglas generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público, esto es, el bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. En otras palabras, esta Representación Social es una Institución de procuración de justicia eficiente, eficaz y confiable con contundencia legal cercana a la sociedad, que coadyuba al desarrollo del país y al disfrute de las libertades y derechos de la Nación; por lo que de manera específica la SEIDO, al ser el área encargada, entre otras cosas, de coordinar el apoyo operativo de investigación y persecución de los delitos contra la delincuencia organizada, a través de sus diversas unidades de investigación, debe ponderarse que el divulgar la información requerida pudiera atentar contra la seguridad pública, siendo que el proporcionar el número de servidores públicos adscritos a las diversas unidades administrativas que componen la estructura orgánica de dicha Subprocuraduría, permitiría poner en riesgo la capacidad de reacción para el cumplimiento de las actividades sustantivas de investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada.

- II. Que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se divulgar la información



peticionada se obstaculizaría el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición el número exacto servidores públicos por cada unidad administrativa de dicha Subprocuraduría, vulneraría así las estrategias y capacidades de la SEIDO, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y por ende, verse afectada la Seguridad Pública, traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.

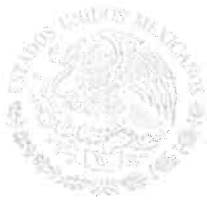
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar la información requerida se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública a través de la investigación y persecución de los delitos; de ahí que resulte de mayor relevancia para la sociedad que esta Institución Federal vele por la Seguridad Pública a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Artículo 110, fracción V:

- I. Un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que los servidores públicos de SEIDO son los encargados de coordinar el apoyo operativo de las Unidades Especializadas en Investigación de delitos en delincuencia organizada y de otras autoridades policiales nacionales y extranjeras proporcionado los elementos necesarios, para el cumplimiento de las investigaciones inherentes a los asuntos de su competencia, ya que al exponer el número total de éstos, ya sea de manera general, o bien, por unidad administrativa, afecta la capacidad de reacción de dicha Subprocuraduría, poniendo en riesgo la vida de los servidores públicos en comento, en virtud que, una vez conocida la citada capacidad de reacción, grupos de la delincuencia organizada podrían perpetrar un ataque con igual o mayor número de elementos, poniendo en riesgo la vida del personal adscrito.
- II. El divulgar la información requerida, superaría el interés público, ya que provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que, se estarían proporcionando datos concretos del estado de fuerza con el que cuenta la SEIDO, poniendo en desventaja a dicha unidad, y por ende se vulneraría la seguridad física y la vida del personal que labora en dicha Subprocuraduría, frente a grupos de delincuencia organizada, ello, derivado de que las actuaciones del Ministerio Público de la Federación tienen como fin el Interés público o general, la investigación y persecución de delitos cometidos por la delincuencia organizada.
- III. Atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información de su interés, la cual se vincula al número actual de personal de la

[illegible]

Página 78 de 185



B.8. Folio de la solicitud 0001700349318

Síntesis

Investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Confidencial

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Solicitamos copia simple de las declaraciones ministeriales de los 10 servidores públicos, nueve ex funcionarios de PEMEX que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño Odebrecht; también copia simple de las declaraciones de tres directivos de la empresa, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre. Todos están dentro de la averiguación previa. La averiguación previa se denomina o se reconoce como FED/SIDF/CGI-CDMX/0000117/2017." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Existe el antecedente de esta solicitud: <http://inicio.inai.org.mx/Historico/Sesi%C3%B3n%20Pleno%202017-12-18.pdf>" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de



la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos;**



afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**

- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga sentencia condenatoria irrevocable, toda vez que se **afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre**, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.
- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. *Reserva de los actos de investigación*

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal.



correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población,** si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- ♦ Que **el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos,** prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, **el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite** por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que **atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.**

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la **Fiscalía Especializada en**



Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción**.

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en



contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.

- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, **e impedir o evitar su uso, divulgación**, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización **indebidos**.
- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite



limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido



citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.



En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA,



CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor.



la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

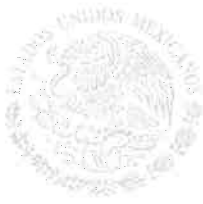
Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.



Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante **sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional**, en los términos señalados en este Código".*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa **afectar la esfera de la vida privada** de personas que al hacerlas identificables, generarían **una percepción negativa** sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo **tanto su presunción de inocencia**, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.9. Folio de la solicitud 0001700349418

Síntesis

investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Equilibrado

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Se solicita a la Procuraduría General de la República los nombres de los funcionarios públicos que han sido citados a declarar por corrupción, sobornos y otros ilícitos relacionados con la empresa Odebrecht, así como de los nombres de aquellos funcionarios o ex funcionarios de la Administración Federal que enfrentan acusaciones penales por este caso." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Esta petición ya fue hecha y resuelta:
<http://inicio.inai.org.mx/Historico/Sesi%C3%B3n%20Pleno%2012-12-18.pdf>" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información solicitada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.



Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**



- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga sentencia condenatoria irrevocable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.
- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple



curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.

- ♦ Que el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el



debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, **el Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción**.

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.



- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, **e impedir o evitar su uso, divulgación**, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización **indebidos**.
- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un **riesgo**



demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada



o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. **Derecho a la intimidad y a la privacidad**

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar **todo***



hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.



Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.



- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.10. Folio de la solicitud 0001700002019

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Denuncias penales, juicios civiles y responsabilidades administrativas en contra de un servidor público.

Confirma

Calificación de Reserva y Confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Se solicita que informe a la suscrita los números de expedientes de los juicios civiles, las **denuncias penales** y en su caso responsabilidad administrativa fincada en contra de Miguel Palacios Vargas quien fungió como Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF y UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0064/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que de cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona citada en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

- ♦ **Indagatorias en general localizadas en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones,** cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias fines, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y



- ♦ Las **denuncias en general** localizadas, respecto de las cuales, la Procuraduría General de la República **ya haya notificado al imputado** los hechos que se investigan **por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal Federal)**, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con las personas citadas en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

- I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:**

...

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y



III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

*CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO*

*CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO*

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)



Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a



inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen



normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulneraría su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Por otro lado, este Órgano Colegiado **confirma** la declaratoria de **incompetencia** respecto a juicios civiles y responsabilidades administrativas, en virtud de que este Sujeto Obligado no está facultado para pronunciarse por los cuestionamientos que se refieren a esas expresiones; lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65 de la LFTAIP.

Toda vez que, el juicio civil es un el proceso judicial que se desarrolla ante los juzgados y tribunales competentes en materias de Derecho civil, por tanto, el Poder Judicial de la Federación es competente para pronunciarse al respecto.



Por otra parte, la Responsabilidad Administrativa, es una responsabilidad perjudiciosa que se genera como consecuencia de una serie de sucesos o hechos que por acción u omisión realizan los servidores y funcionarios públicos en el desarrollo de sus actividades, por consiguiente, la autoridad para pronunciarse al respecto es la Secretaría de la Función Pública a través de Órgano Interno de Control correspondiente, de conformidad en el artículo 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala:

Artículo 37. A la **Secretaría de la Función Pública** corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

Siendo así las cosas, se **instruye** a la UTAG orientar al particular al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública; así como, a las Contralorías Locales.



B.11. Folio de la solicitud 0001700002419

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Investigación sobre el caso Odebrecht

Confianza

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Solicito información acerca del caso Obredecht, que seguimiento se le esta dando con respecto a dicha investigación?" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información petitionada **es de** la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno,



ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga **sentencia condenatoria irrevocable**, toda vez que se **afectaría su**



intimididad, prestigio y buen nombre, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población,** si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.



- ♦ Que **el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos**, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, **el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.**

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción** es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados,



establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción.**

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción.**

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años.**
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su



responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados



con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha **determinado confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que **deben**



observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

*CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO*

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos



1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.



De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*



3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. **Principio de presunción de inocencia**

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.12. Folio de la solicitud 0001700004119

Síntesis

Investigación sobre el caso Odebrecht

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Solicito los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener) que hayan sido citados a declarar por el caso Odebrecht o que ya enfrenten acusaciones penales por el mismo." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información petitionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto ~~disidente a la~~ resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios



criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria;** es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación** obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga **sentencia condenatoria irrevocable,** toda vez que se **afectaría su**



intimidad, prestigio y buen nombre, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, **ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población,** si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.



- ♦ Que el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados,



establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción.**

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, **el Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción.**

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años.**
- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la **documentación e información** que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su



responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados



con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha **determinado confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben



observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos



1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.



De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*



3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.13. Folio de la solicitud 0001700004419

Síntesis

(Investigación sobre el caso Odebrecht)

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva y confidencialidad

Contenido de la Solicitud:

"Requerimiento de Información Pública

Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la Republica

Presente

ÚNICO

Solicito copia simple de la declaración ministerial de Emilio Lozoya Agustín, dentro de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.

Respetuosamente

Felipe Francisco Velázquez Michel" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

Análisis a la solicitud:

Aún cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la entonces Procuraduría General de la República a través del recurso de revisión RRA 4436/18, conceder a un particular el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión pública (**por existir un interés público**) en la que debería protegerse la información confidencial y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la facultad de investigación y reacción de esta Institución, tales como los nombres de personas presuntamente involucradas que no han comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de investigación, este **Comité de Transparencia** estima necesario realizar un análisis al caso, a fin de poder determinar si la información peticionada es de la misma naturaleza al precedente señalado actualiza alguna causal de clasificación prevista en la Ley Federal de Transparencia.



Por ende, se traen a colación los siguientes puntos de análisis de contexto, a fin de poder emitir de manera fundada y motivada una determinación al caso de mérito:

- ♦ Que tal y como lo sostuvo el Comisionado del Órgano Garante en materia de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov en su voto disidente a la resolución formulada al RRA 4436/18, existe una **contradicción** a los propios criterios adoptados por la **mayoría** de los Comisionados integrantes de ese Pleno, ello en virtud de que contiene razonamientos que se alejan del criterio que ha sostenido en reiteradas ocasiones ese Colegiado de Transparencia, **al salvaguardar las averiguaciones previas o carpetas de investigación que aún se encuentren en trámite.**

Como prueba de ello, se traen a cita los recursos de revisión RRA 1070/18, RRA 3496/17, RRA 3595/17, RRA 4732/17, RRA 3904/17, RRA 3903/17, RRA 4527/17, RRA 6582/17 y RRA 7889/17 relacionados con el tema de referencia, donde ese Instituto Autónomo **confirmó la clasificación de reserva** de cualquier información relacionada con la carpeta de investigación inherente al caso Odebretch, **por encontrarse en trámite ante el Ministerio Público** de esta Institución, **situación jurídica que aún sostiene la aludida indagatoria**; es decir, aún se están reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que de exponer dicha información vulneraría la eficacia de **la Institución**, pudiendo alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la formulación de la imputación respectiva, disminuyendo la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.

- ♦ Que la **Ley General** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, prescribe en su artículo 113, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.**
- ♦ Que la **Ley Federal** de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, establece en su artículo 110, fracciones VII, X y XII **que será información clasificada como reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; y se encuentre contenida dentro de las**



investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

- ♦ Que esta Representación Social se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable que no tenga sentencia condenatoria irrevocable, toda vez que se **afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre**, actualizando la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.
- ♦ Que la naturaleza de la información contenida en una investigación en trámite, es reservada conforme al CNPP, tal como se cita a continuación:

Artículo 218. *Reserva de los actos de investigación*

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.



- ♦ Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector minoritario de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- ♦ Que el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, en relación con el 50 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito.

- ♦ Que toda vez que en diversos medios de comunicación e incluso el propio Comisionado Ponente Joel Salas Suarez del Pleno del INAI, han sostenido que la carpeta de investigación en comento contempla la investigación de conductas relacionadas con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito; es decir, delitos contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal "por hechos de corrupción", y que por ende, dado que la investigación está relacionada directamente con delitos tipificados por "hechos de corrupción", la documentación actualizaba el supuesto de excepción previsto por la fracción II, del artículo 112 de la LFTAIP, el cual contempla que no podrá reservarse aquella información relacionada con actos de corrupción y así ordenar la entrega de la versión publica de la información solicitada.

Lo cierto también es que, el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley



considera como delitos por hechos de corrupción y que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

Por ello, si bien se desprende la creación de la **Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**; es importante mencionar, que en los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientras el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por tanto, **este Órgano Constitucional Autónomo por conducto de las diversas Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal Federal**, como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que **el Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son considerados como hechos de corrupción**.

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Representación Social señale que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, sean efectivamente considerados actos de corrupción, máxime que en caso de existir alguna investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que **el Órgano Jurisdiccional** hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados tipos penales, y no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, **la única autoridad facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es este Órgano Constitucional Autónomo en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta en tanto se designe al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción**, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso *prima facie*, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el **Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción**.

- ♦ Que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, cita que el **entregar documentos contenidos en un expediente de investigación** a quien de acuerdo a la normativa penal no tenga el derecho, **es proporcional a cometer delito** en contra de la administración de la justicia, al cual corresponde **pena privativa de libertad hasta por diez años**.



- ♦ Que el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que incurrirá en **falta administrativa** no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, **e impedir o evitar su uso, divulgación**, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización **indebidos**.
- ♦ Que la agente del Ministerio Público Federal a cargo de la carpeta de investigación cuenta con una suspensión provisional relacionada al expediente de cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 4436/18, según consta en el acuerdo de 15 de enero de 2019 dentro del Juicio de Amparo 1386/2018-V del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Determinación del Comité de Transparencia:

Una vez expuesto el contexto que nos ocupa para el presente asunto, este Órgano Colegiado, determina lo siguiente:

ACUERDO CT/ACDO/0056/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad de la carpeta de investigación de referencia que se encuentra integrando el Ministerio Público de la Federación adscrito a la **SEIDF** en términos de los artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se proporciona la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción XII:

- I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya **que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones**



implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en alguna investigación en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

- II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman dicho catálogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
- III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba, medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por **personas físicas** de las cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de referencia, este Grupo Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar, víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas.

Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

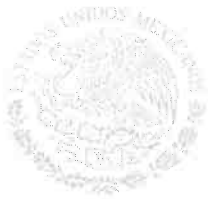
...
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas”, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.



En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA,



CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor,



la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.



Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



B.14. Folio de la solicitud 0001700011019

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción VIII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la remuneración bruta y neta del servidor público (...), Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, así como todas las percepciones, sueltos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, o cualquier otro tipo de ingreso, durante todo el tiempo que lleve trabajando en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos del servidor público objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: (...);

II. Cargo: Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0068/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de **otorgar** cualquier información que de cuenta o no que



determinada persona; en este caso, la citada en la petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de **proporcionalidad**, se desprende que el reservar información relativa a datos de **personal sustantivo** de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y **Tratados Internacionales**. -----



B.15. Folio de la solicitud 0001700011119

Síntesis

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la Institución

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción VIII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la remuneración bruta y neta de la servidora pública NORA PATRICIA CAUICH MAY, Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, así como todas las percepciones, sueltos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, o cualquier otro tipo de ingreso, durante todo el tiempo que lleve trabajando en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción VIII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la remuneración bruta y neta de la servidora pública NORA PATRICIA CAUICH MAY, Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, así como todas las percepciones, sueltos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, o cualquier otro tipo de ingreso, durante todo el tiempo que lleve trabajando en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República.

Los datos de la servidora pública objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: Nora Patricia Cauich May;

II. Cargo: Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial



de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0069/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las



actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.16. Folio de la solicitud 0001700011219

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción VIII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la remuneración bruta y neta de la servidora pública MARÍA ISABEL UC PECH, Titular de la Célula D de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, así como todas las percepciones, sueltos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, o cualquier otro tipo de ingreso, durante todo el tiempo que lleve trabajando en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos de la servidora pública objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: María Isabel Uc Pech;

II. Cargo: Titular de la Célula D de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;"

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

ACUERDO

CT/ACDO/0070/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la



petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.17. Folio de la solicitud 0001700011419

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción VIII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la remuneración bruta y neta del servidor público ANTONIO LEÓN BUSTO, Agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, así como todas las percepciones, sueltos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, o cualquier otro tipo de ingreso, durante todo el tiempo que lleve trabajando en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos del servidor público objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: Antonio León Busto;

II. Cargo: Agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0059/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **reserva** invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de **otorgar** cualquier información que de cuenta o **no que**



determinada persona; en este caso, la citada en la petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. -----



B.18. Folio de la solicitud 0001700012019

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción XVII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la información curricular del servidor público ERIC LÓPEZ FÉLIX, Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, incluyendo las sanciones administrativas a las que haya sido objeto." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos del servidor público objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: Eric López Félix;

II. Cargo: Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0071/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la



petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de **proporcionalidad**, se desprende que el reservar información relativa a datos de **personal sustantivo de esta Institución**, no se traduce en un medio restrictivo **de acceso a la información**, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la **vida, la seguridad y la salud**, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.19. Folio de la solicitud 0001700012119

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirmita

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción XVII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la información curricular de la servidora pública NORA PATRICIA CAUICH MAY, Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, incluyendo las sanciones administrativas a las que haya sido objeto." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos de la servidora pública objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: Nora Patricia Cauich May;

II. Cargo: Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0072/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la

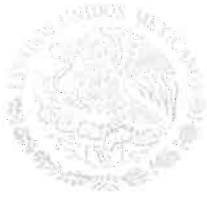


petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110. fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.20. Folio de la solicitud 0001700012219

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción XVII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la información curricular de la servidora pública MARIA ISABEL UC PECH, Titular de la Célula D de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, incluyendo las sanciones administrativas a las que haya sido objeto." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos de la servidora pública objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: María Isabel Uc Pech;

II. Cargo: Titular de la Célula D de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0073/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la petición sea personal que realiza actividades



sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.21. Folio de la solicitud 0001700012419

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción XVII, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a la información curricular del servidor público ANTONIO LEON BUSTO, Agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, incluyendo las sanciones administrativas a las que haya sido objeto." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos del servidor público objeto de la presente solicitud son los siguientes:

I. Nombre: Antonio León Busto;

II. Cargo: Agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;

III. Delegación: Yucatán."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0074/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la



petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110. fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de las indagatorias a cargo de este Ministerio Público Federal podrían atentarlos.
- III. Que atendiendo al principio de **proporcionalidad**, se desprende que el reservar información relativa a datos de **personal sustantivo de esta Institución**, no se traduce en un medio restrictivo **de acceso a la información**, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la **vida, la seguridad y la salud**, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



B.22. Folio de la solicitud 0001700012519

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Información perteneciente a probable
personal sustantivo de la institución

Confirma

Clasificación de reserva

Contenido de la Solicitud:

"Vengo por medio del presente, con fundamento en las garantías Constitucionales consignadas en los arábigos 6 y 8 de la Ley Fundamental, así como en los diversos artículos 20 y 70, fracción XXX, a solicitar el acceso a la información pública, relativa a las estadísticas generadas por el servidor público (...), Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

En esa misma tónica, y a efecto de señalarle con precisión qué es lo que se está instando a través de la presente, estimo pertinente señalar que las estadísticas a las que se refiere el suscrito consistente, medularmente, en el desenlace, o determinación, de todas las carpetas de investigación que le hubiesen sido asignadas al Agente Investigador supra invocado. Asimismo, deviene necesario que se nos proporcionen, sin requerir datos personales de las partes dentro de las citadas indagatorias, los detalles relativos, entre otras cosas, a:

- I. Tipo de delito investigado en cada carpeta;*
- II. Tiempo que le tomó al Licenciado López Félix determinar la carpeta;*
- III. Cualquier tipo de queja y/o, medio de impugnación interpuesto en su contra por las víctimas dentro de cada una de las carpetas;*
- IV. Número, y si es posible descripción sucinta, de los actos de investigación realizados dentro de cada una de las indagatorias;" (Sic)*

Otros datos para facilitar su localización:

"Los datos del servidor público objeto de la presente solicitud son los siguientes:

- I. Nombre: ERIC LOPEZ FELIX;*
- II. Cargo: Titular de la Agencia Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República;*
- III. Delegación: Yucatán." (Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial



de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y SCRPPA.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0075/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la OM y la SCRPPA, respecto de otorgar cualquier información que de cuenta o no que determinada persona; en este caso, la citada en la petición sea personal que realiza actividades sustantivas dentro de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de este Sujeto Obligado tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, **por conducto** del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de **conformidad** con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que **el divulgar** la información requerida, superaría el interés público, es decir, **provocaría un riesgo** de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución, y hacer públicos datos que permitieran localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, podría traducirse en atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las



III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Página 165 de 185



B.23. Folio de la solicitud 0001700013819

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Investigaciones en torno al homicidio de Luis
Donato Colosio Murrieta

Confirma

Clasificación de reserva e inexistencia de la
información

Contenido de la Solicitud:

"Solicito las declaraciones ministeriales de Domiro García Reyes y Federico Arreola Castillo hechas durante la gestión del subprocurador especial para el caso Colosio Pablo Chapa Bezanilla." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0076/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como reservados los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CFPP que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.



Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva hasta por un periodo de cinco años de la indagatoria en comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro

[illegible]

Página 168 de 185



B.24. Folio de la solicitud 0001700014919

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Investigaciones en torno al homicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta

Confirma

Clasificación de reserva e inexistencia de la
información

Contenido de la Solicitud:

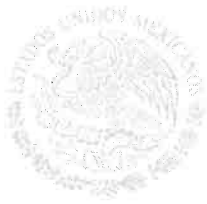
"Solicito una copia de la averiguación relacionada con los sucesos del 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La averiguación previa versa sobre el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF.**

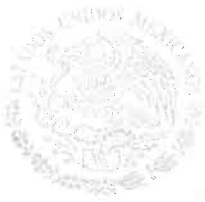
**ACUERDO
CT/ACDO/0077/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como reservados los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, **en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos** bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

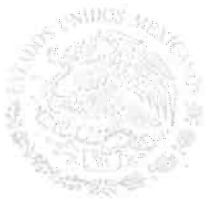


Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva hasta por un periodo de cinco años de la indagatoria en comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la



información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



C. Solicitudes de acceso a la información en la que se analiza la entrega o puesta a disposición de la versión pública de la información requerida:

C.1. Folio de la solicitud 0001700339218

Síntesis	Acuerdos, convenios y tratados para combate de carteles de la droga entre la Procuraduría General de la República de México y la Fiscalía General de la Nación de Colombia
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Resguardo de información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito escaneados todos los documentos, misivas, acuerdos, convenios y tratados para combate de carteles de la droga entre la Procuraduría General de la República de México y la Fiscalía General de la Nación de Colombia durante el periodo 2012-2018 Solicito que toda esta información sea desglosada en el formato Excel anexado. Todo lo anterior es solicitado en virtud del texto vigente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el pasado 9 de mayo de 2016, cuyo Capítulo 1, Artículo 2, fracciones I, II y III, señalan que se debe "I Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; y III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados Así como el Artículo 3, Capítulo 1, el cual prevé que "Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. "El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información". En lo que respecta a la Unidad de Transparencia de PGR, está obligada según el Art. 122 del procedimiento de acceso a la información pública, Capítulo 1, a "garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título". Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias



y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En caso de no tener información de años anteriores, apelamos a nuestro derecho de acceso a la información mediante la consulta pública a brevedad." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **DGALEYN y CAIA.**

ACUERDO CT/ACDO/0078/2019:

Del análisis a la documental solicitada, es que en el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la entrega en versión pública del instrumento jurídico localizado por la CAIA, denominado "ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, CORRUPCIÓN, DELITOS CONEXOS Y DEL IMPACTO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", mismo que se relaciona con la información petitionada, clasificando y resguardando **unicamente** datos referentes a puntos de contacto de la contraparte colombiana; tales como teléfono, correo electrónico y dirección, en términos del artículo **110, fracción II** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada para la versión pública del documento de referencia, es que se **expone** la siguiente prueba de daño:



- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Debido a que la información que proporcionaron las autoridades de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, para el punto de contacto fue única y exclusivamente con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el citado instrumento, por lo que existe el riesgo que, al dar a conocer dichos datos, terceros ajenos a la dependencia firmante contacten a la persona e institución extranjera, generando actos de molestia y el uso indebido de dichos datos, situación que incide en las relaciones internacionales entre México y la República de Colombia.

Relacionado con lo anterior, y tomando en cuenta que los puntos de contacto de la República de Colombia en el instrumento fueron designados para abordar aspectos sensibles de combate a los delitos, éstos no tienen un perfil de atención directa a la sociedad en general, por lo que se desprende que al hacer públicos los datos de los contactos, el mencionado acto de molestia podría agravarse, ya que sujetos ajenos al instrumento pudieran tratar de contactarlos.

- II. Riesgo de perjuicio: En ese sentido, existe un riesgo de que se perjudiquen las relaciones internacionales entre esta Institución y la República de Colombia, toda vez que los precipitados actos de molestia podrían afectar la construcción de la política de colaboración y cooperación en materia de procuración de justicia, así como para la convivencia armónica entre México y la República de Colombia; lo anterior, en razón de que las autoridades cooperantes de la República de Colombia pudieran tener resistencia de ahora en adelante a cooperar con instituciones mexicanas, toda vez que se correría el riesgo de que se difundan los datos de contacto a personas ajenas a esta Representación Social, sin su consentimiento.

Por lo anterior, en caso de difundir tales datos, se podrían extinguir los vínculos que se establecen con la República de Colombia para el combate a los delitos competencia de esta Institución, como lo son los cometidos por la delincuencia organizada y sus delitos conexos.

- III. Principio de proporcionalidad: Ahora bien, la reserva de la información conforme a este numeral es proporcional, ya que se están dando a conocer aspectos de la colaboración con la República de Colombia, pero únicamente se reserva la información para contactar a las autoridades de la República de Colombia.



D. Solicitudes de acceso a la información en la que se analiza la incompetencia para proporcionar o pronunciarse por la información requerida:

D.1. Folio de la solicitud 1700200000519 – Centro de Evaluación de Control y Confianza

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

facultades de una persona para realizar investigaciones de posibles delitos relacionados con menores de edad.
Confianza
Incompetencia

Contenido de la Solicitud:

"1.- Para el Instituto Nacional de Pediatría y para la Secretaría de Salud (SSA), se me informe cual es el cargo, facultades y obligaciones de la Doctora de nombre (...), con cédulas profesionales números: (...), (...) y (...), y desde luego si cuenta con facultades para realizar investigaciones de posibles delitos relacionados con menores de edad, y si cuenta con la certificación a que se refieren los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo dispuesto por los Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 64, 65 y demás relativos aplicables a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2.- Con respecto de PGR-CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, PGR-INSTITUTO DE FORMACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL, SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), que me informen si existen datos o registros de que la Doctora de nombre (...), con cédulas profesionales números: (...), (...) y (...), si cuenta con la certificación a que se refieren los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo dispuesto por los Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 64, 65 y demás relativos aplicables a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y si cuenta con antecedentes de trabajo dentro de las Instituciones de Administración de Justicia Federal, en su carácter de Medico" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM – CECC.**



D.2. Folio de la solicitud 1700600007119 – Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Estadística sobre carpetas de investigación

Confirma

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:

1. Número de carpetas de investigación por delito, iniciadas desde el año 2016 a la fecha.
2. Número de carpetas de investigación por delito, judicializadas desde el año 2016 a la fecha.
3. Número de carpetas de investigación por delito, concluidas a través de un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, de 2016 a la fecha.
4. Número de carpetas de investigación por delito, archivadas por el Ministerio Público, por falta de datos de prueba suficientes, de 2016 a la fecha.
5. Número de carpetas de investigación por delito, concluidas por el Ministerio Público por no existir delito que perseguir, desde 2016 a la fecha.
6. Número de carpetas de investigación por delito, determinadas por el Ministerio Público a través del Principio de Oportunidad, desde 2016 a la fecha" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OP – OADEMASCMP.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0080/2019:**

Del análisis a la documental solicitada, es que en el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de incompetencia del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de mérito, para proporcionar información relativa a los puntos 1, 2, 4, 5 y 6.



Y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular al sujeto obligado denominado **Procuraduría General de la República**, en tanto no se modifique y apruebe el Padron de Sujetos Obligados.

Página 178 de 185



E. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

**ACUERDO
PGR/CT/ACDO/0081/2019:**

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información requerida:

- E.1. Folio 0001700335718**
- E.2. Folio 0001700338518**
- E.3. Folio 0001700340018**
- E.4. Folio 0001700340118**
- E.5. Folio 0001700341618**
- E.6. Folio 0001700341718**
- E.7. Folio 0001700347918**
- E.8. Folio 0001700348518**
- E.9. Folio 0001700349218**
- E.10. Folio 0001700349718**
- E.11. Folio 0001700349818**
- E.12. Folio 0001700349918**
- E.13. Folio 1700100063618 – AIC**
- E.14. Folio 1700100063918 – AIC**

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. -----



F. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada o entrega de los datos personales:

F.1. Folio de la solicitud 0001700329218

Ejercicio ARCO:

Acceso

Síntesis

Conocer la existencia o no de alguna investigación en contra del suscrito

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Improcedencia

Contenido de la Solicitud:

"Buenas tardes. Deseo conocer toda la información que dicha dependencia tiene sobre mí. Ya sea información sobre mi persona, actividades en las que he estado involucrada, mis comunicaciones, mis relaciones o cualquier otro tipo de información con que se cuente y que tenga alguna relación conmigo. De igual manera, deseo conocer el medio por el cual la dependencia se hizo de la información que posee relacionada conmigo. Mi deseo es acreditar mi identidad hasta el momento de respuesta en la unidad de transparencia. Gracias, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular" (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Agrego mi CURP a fin de que no haya confusión con homónimos (...)" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

**ACUERDO
PGR/CT/ACDO/0082/2019:**

Análisis de la solicitud:



Al advertir que la solicitante pretende conocer si existe dentro de este Sujeto Obligado de procuración de justicia, algún tipo de información relacionada con su persona, es que de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 55 de la LGPDPPSO, es posible dilucidar que esta Fiscalía no puede pronunciarse por cualquier dato que de cuenta de la existencia o no de información que pueda haber recabado esta Institución en donde este inmiscuida la solicitante.

Ello en virtud de que, esta Instancia al tener como misión la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general; el revelar que se cuenta con información de determinada persona física se estaría afirmando que la misma esta inmiscuida en procedimientos penales por parte de esta Institución.

Determinación del Comité de Transparencia

Por lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 84, fracción III de la **LGPDPPSO**, este Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la **improcedencia** por parte de esta Institución para pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia de cualquier información que pueda o no tener este Sujeto Obligado donde se encuentre inmersa la solicitante, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción III, el cual cita que:

Artículo 55. Las únicas causas en las que **el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente** son:

...

III. Cuando exista un impedimento legal;

Refuerza lo anterior, lo previsto en los artículos 218 y 219 del CNPP; así como artículo 16 del CFPP, que citan lo que a continuación se indica, en virtud de que solo el particular podrá tener acceso a información por la probable comisión de delitos, únicamente hasta que el Ministerio Público de la Federación se lo indique a través de esa vía.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

...

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

En la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, **son estrictamente reservados**. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial

Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso de que **el Ministerio Público** se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

...

Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.





Sin asuntos generales para la actual sesión.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom right corner, there are some faint blue ink marks, possibly remnants of handwriting or a signature.

1





Siendo las 18:41 horas del mismo día, se dio por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del Área Coordinadora de
Archivos en la Institución.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.